

Calle Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona

RESOLUCIÓN del procedimiento de tutela de derechos núm. PT 13/2020, instado contra la Dirección General de la Policía del Departamento de Interior de la Generalitat

Antecedentes

1.- En fecha 03/03/2020 tuvo entrada en la Autoridad Catalana de Protección de Datos un escrito del sr. (...) (en adelante, persona reclamante), por el que formulaba una reclamación por la presunta desatención del derecho de cancelación, que había ejercido previamente ante la Dirección General de la Policía del Departamento de Interior de la Generalitat (en adelante, DGP). En concreto, la persona reclamante solicitaba la cancelación de sus datos personales que figuraban registrados en el fichero SIP PF, relativos a las diligencias policiales núm. (...) /2019. La persona reclamante aportaba copia de la solicitud de cancelación presentada ante la DGP, a efectos de acreditar el ejercicio de este derecho ante el responsable del tratamiento.

2.- De acuerdo con el artículo 117 del Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en adelante, RLOPD y LOPD, respectivamente), mediante oficio de fecha 03/07/2020 se dio traslado de la reclamación a la DGP, para que en el plazo de 15 días formulara las alegaciones que estimase pertinentes.

3.- La DGP formuló alegaciones mediante escrito de fecha 10/07/2020, en el que exponía lo siguiente:

En fecha 19 de diciembre de 2019, la representación del señor (...) solicitó la cancelación de los datos de carácter personal relacionados con las diligencias policiales núm. (...) /2019, en las que fue identificado por robo/hurtos de uso de vehículo, y denunciado en las ampliativas núm. (...) /2019, y aportaba como documentación justificativa auto de sobreseimiento provisional.

2. En fecha 5 de marzo de 2020, se le envía requerimiento de subsanación o mejora de la solicitud en el que se le pide que aporte el archivo definitivo del procedimiento judicial. Este requerimiento se le notifica el 10 de marzo de 2020.

3. En respuesta a dicho requerimiento, la interesada aporta una serie de alegaciones. Una vez valoradas y realizadas las comprobaciones pertinentes con la unidad instructora, se concluye cancelar los datos solicitados.

4. En fecha 30 de junio de 2020, el Director General de la Policía dicta resolución en la que acuerda hacer efectiva la cancelación de los datos de carácter personal registrados en los ficheros del ámbito SIP solicitados.

5. En último lugar, y tal y como nos solicita, le remito copia de la siguiente documentación:

a) Copia de la solicitud de cancelación, de la documentación que se adjuntaba, y de la resolución dictada."

La DGP aportó toda la documentación que mencionaba en su escrito, salvo en la resolución dictada en fecha 30/06/2020 en respuesta a la solicitud de cancelación.

Fundamentos de Derecho

1.- Es competente para resolver este procedimiento la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, de acuerdo con los artículos 5.b) y 8.2.b) de la Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

2.- En cuanto al régimen jurídico de aplicación a la solicitud de cancelación de datos formulada por la persona reclamante, cabe señalar, en primer lugar, que el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27/4, relativo a la protección de las personas físicas en lo que se refiere al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos (en adelante, RGPD) excluye expresamente de su aplicación los tratamientos de datos personales llevados a cabo por (art. 2.2.d RGPD): *“las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución de sanciones penales, incluida la finalidad de protección y prevención ante amenazas a la seguridad pública y su prevención”*, donde se enmarca la solicitud de cancelación que es objeto de la reclamación de la que trae causa esta resolución. El considerante 19º del RGPD señala expresamente que estos tratamientos deben regirse por la Directiva (UE) 2016/680, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27/4, relativa a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, ya la libre circulación de estos datos, que prevé en el artículo 16 el derecho de supresión, que viene a sustituir al anterior derecho de cancelación.

Sin embargo, la Directiva (UE) 2016/680 aún no ha sido transpuesta al derecho interno estatal, aunque el artículo 63 de la Directiva establecía un plazo para adoptar y publicar las normas legales, reglamentarias y administrativas para dar cumplimiento a la Directiva, que finalizaba el 06/05/2018. Y si bien es cierto que es criterio doctrinal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que los particulares pueden invocar el efecto directo de los preceptos de la directiva cuando les confieran derechos de forma incondicional y suficientemente clara y precisa ante las administraciones públicas, también lo es que el legislador estatal ha previsto expresamente en la disposición transitoria 4ª de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que los tratamientos de datos que se encuentran sometidos a la Directiva (UE) 2016/680 (como es el caso presente) continuarán rigiéndose por la LOPD.

Así las cosas y por lo que ahora interesa, cuando el artículo 16.2 de la Directiva (UE) 2016/680 prevé que los Estados miembros exigirán al responsable del tratamiento la supresión de los datos personales *“sin dilación indebida”* y el derecho de los interesados a obtener del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales, el cumplimiento de esta exigencia debe entenderse cumplida en los términos previstos en el artículo 16.1 de la LOPD, sobre el derecho de rectificación y cancelación, el cual establece, por lo que ahora interesa, que el responsable de

Calle Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona

tratamiento tiene la obligación de hacer efectivo el derecho de cancelación del interesado en el plazo de diez días. Aparte de esto, el artículo 16 de la LOPD determina lo siguiente:

- “1. El responsable del tratamiento tiene obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.*
- 2. Serán rectificadas o canceladas, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en esta Ley y, en particular, cuando dichos datos sean inexactos o incompletos.*
- 3. La cancelación da lugar al bloqueo de los datos, y sólo deben conservarse a disposición de las administraciones públicas, los jueces y los tribunales, para el cuidado de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de estas responsabilidades. Cumplido este plazo, debe procederse a la supresión.*
- 4. Si los datos rectificadas o canceladas han sido comunicados previamente, el responsable del tratamiento notificará la rectificación o cancelación efectuada a quienes se hayan comunicado, en caso de que éste último mantenga el tratamiento, que también debe proceder a la cancelación.*
- 5. Los datos de carácter personal deben ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.”*

Por su parte, el artículo 31.2 del RLOPD dispone lo siguiente:

“2. El ejercicio del derecho de cancelación dará lugar a que se supriman los datos que sean inadecuados o excesivos, sin perjuicio del deber de bloqueo conforme a este reglamento. (...)”

El artículo 32 del RLOPD, apartados 1 y 2, determina lo siguiente:

- “1. (...) En la solicitud de cancelación, el interesado indicará a qué datos se refiere, aportando al efecto la documentación que lo justifique, en su caso.*
- 2. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de rectificación o cancelación en el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que de forma expresa se responda a la petición, el interesado podrá interponer la reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.*
En caso de que no disponga de datos de carácter personal del afectado, igualmente se lo comunicará en el mismo plazo.”

Dado que el derecho objeto de esta resolución se refiere a un tratamiento efectuado por las fuerzas y cuerpos de seguridad, es necesario acudir a la regulación específica para estos supuestos prevista en los artículos 22.4 y 23.1 de la LOPD, los cuales determinan lo siguiente:

*“Artículo 22. Ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
(...) 4. Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las investigaciones que hayan motivado su almacenamiento.*

Calle Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona

A estos efectos, se considerará especialmente la edad del afectado y el carácter de los datos almacenados, la necesidad de mantener los datos hasta la conclusión de una investigación o procedimiento concreto, la resolución judicial firme, especialmente la absoluta, el indulto, la rehabilitación y la prescripción de responsabilidad.

Artículo 23. Excepciones a los derechos de acceso, rectificación y cancelación

1. Los responsables de los ficheros que contengan los datos a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo anterior podrán denegar el acceso, rectificación o cancelación en función de los peligros que pudieran derivarse para la misma. defensa del Estado o la seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén llevando a cabo. (...)

Por otra parte, el artículo 18 de la LOPD, en lo referente a la tutela de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, establece en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“1. Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en esta Ley podrán ser objeto de reclamación por los interesados ante la Agencia de Protección de Datos, en la forma que reglamentariamente se determine.

2. El interesado al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, podrá ponerlo en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos o, en su caso, del organismo competente de cada comunidad autónoma, que debe asegurarse de la procedencia o improcedencia de la denegación.”

En consonancia con lo anterior, el artículo 16.1 de la Ley 32/2010, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, dispone lo siguiente:

“1. Las personas interesadas a las que se deniegue, en parte o totalmente, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, o que puedan entender desestimada su solicitud por no haber sido resuelta dentro del plazo establecido, pueden presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos.”

3.- Expuesto el marco normativo aplicable, a continuación procede analizar si la DGP resolvió y notificó, dentro del plazo previsto por la normativa de aplicación, el derecho de cancelación ejercido por la persona reclamante, ya que precisamente el motivo de queja de la persona que inició el presente procedimiento de tutela de derechos era el hecho de no haber obtenido respuesta dentro del plazo previsto al efecto.

En cuanto a la presunta desatención de la solicitud de cancelación que es objeto de reclamación, consta acreditado en el procedimiento que en fecha 19/12/2019 tuvo entrada en el registro de la sede del Departamento de Interior un escrito de la persona aquí reclamante, mediante el cual solicitaba la cancelación de sus datos personales registrados en el fichero del ámbito SIP, relacionados con las diligencias policiales núm. (...)/2019.

De acuerdo con los artículos 16 LOPD y 32 RLOPD, la DGP debía resolver y notificar la

solicitud de cancelación en el plazo máximo de diez días a contar desde la fecha de recepción de cada solicitud.

En relación con la cuestión del plazo, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 21.3 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (en adelante, LPAC) y el artículo 41.7 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña (en adelante, LRJPCat), por un lado, el cómputo del plazo máximo en procedimientos iniciados a instancia de parte -como es el caso- se inicia desde la fecha en que la solicitud tuvo entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Y por otra parte, que el plazo máximo lo es para resolver y notificar (artículo 21 de la LPAC), de modo que antes de finalizar este plazo se deberá haber notificado la resolución, o al menos haberse producido intento de notificación debidamente acreditado (art. 40.4 LPAC).

A este respecto, la Autoridad desconoce en qué fecha concreta tuvo entrada la solicitud de cancelación en el registro de la DGP, que era el órgano competente para resolverla. De todas formas, debe tenerse en cuenta que el Departamento de Interior tiene implantado el servicio de valija electrónica (eValisa), mediante el cual el registro de entrada y salida de documentos se realiza de forma automática e inmediata. Por lo que es probable que la solicitud de cancelación hubiera tenido entrada en el registro de la DGP el mismo día 19/12/2019 o en los días inmediatamente posteriores.

Así pues, el plazo para dar respuesta finalizaría el 08/01/2020 o en uno de los días inmediatamente posteriores. Sin embargo, consta en el procedimiento que la primera respuesta de la DGP fue un oficio de fecha 2/03/2020 dirigido a la persona ahora reclamante, por el que se le requería la enmienda o mejora de su solicitud (la aportación de certificación judicial que acreditara el archivo definitivo de un procedimiento judicial). Este oficio se notificó al reclamante en fecha 10/03/2020. Según el artículo 22 LPAC, el procedimiento puede suspenderse: *“Cuando se deba requerir a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos (...), por el tiempo que transcurra entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por parte del destinatario”*.

Así las cosas, aunque la DGP hubiera suspendido el procedimiento, esta suspensión habría producido efectos desde el 10/03/2020, que es una fecha que resulta claramente extemporánea, en el sentido de que ya se había agotado con creces el plazo de diez días previsto legalmente para que la DGP diera respuesta a la solicitud de cancelación, que como se ha señalado acabó el 08/01/2020 o en uno de los días inmediatamente posteriores a esa fecha. Cabe decir, por último, que la suspensión de los plazos administrativos que estableció la DA 3ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se inició el 14/03/2020, y, por tanto, la suspensión que estableció este real decreto tampoco afectaría al cómputo del plazo analizado.

Calle Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona

En consecuencia, procede estimar la reclamación, en los extremos relacionados con la falta de respuesta a la solicitud de ejercicio del derecho de cancelación, ya que la DGP no resolvió y notificó en forma y plazo la solicitud de cancelación del reclamante.

4.- En cuanto al fondo de la reclamación, la DGP ha manifestado que mediante resolución de fecha 30/06/2020, y en aplicación de la normativa aplicable -art. 22.4 y 23.1 LOPD y arte. 18 de la Instrucción 12/2010 de la DGP- estimó la solicitud de cancelación de datos presentada por la persona aquí reclamante. Dada la estimación de la solicitud de cancelación, según manifiesta la DGP, resulta innecesario efectuar más consideraciones al respecto.

No obstante, debe ponerse de manifiesto que la DGP no ha aportado ante la Autoridad una copia de la resolución de fecha 30/06/2020 estimatoria de la cancelación solicitada por el reclamante, ni tampoco ha acreditado ante la Autoridad su notificación a la persona reclamante.

5.- De conformidad con todo lo expuesto y con lo establecido en los artículos 16.3 de la Ley 32/2010 y 119 del RLOPD, procede requerir la DGP para que, dentro del plazo máximo de 10 días -a contar a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución- aporte ante la Autoridad una copia de la resolución de 30/06/2020 mencionada, así como del documento acreditativo de su notificación a la persona reclamante.

Por todo ello,

RESUELVO

Primero.- Declarar extemporánea la resolución de fecha 30/06/2020 de la DGP, mediante la cual se estima la solicitud de cancelación formulada por el señor (...), por no haber dado respuesta en el plazo establecido en la normativa aplicable. En cuanto al fondo, declarar que la DGP ha satisfecho el derecho, si bien este pronunciamiento está condicionado a la acreditación ante la Autoridad de la resolución y su notificación a la persona reclamante, en los términos que se señalan en el punto siguiente.

Segundo.- Requerir la DGP para que en el plazo de 10 días, a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución, aporte ante la Autoridad el documento acreditativo (por ejemplo, el comprobante de Correos si ha sido éste el medio empleado) de la notificación a la persona reclamante de la resolución de fecha 30/06/2020 estimatoria de la solicitud de cancelación presentada por esta persona, así como una copia de esta resolución.

Tercero.- Notificar esta resolución a la DGP ya la persona reclamante.

Cuarto.- Ordenar la publicación de la Resolución en la web de la Autoridad (www.apd.cat), de conformidad con el artículo 17 de la Ley 32/2010, de 1 de octubre.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa de acuerdo con los artículos 26.2 de la Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos y 14.3 del Decreto 48/2003, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Catalana de Protección de Datos, las partes interesadas pueden interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación, de acuerdo con lo que prevé el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015 o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo ante los juzgados de lo contencioso administrativo de Barcelona, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Igualmente, las partes interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

La directora,